



Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS

/// Martín, 4 de octubre de 2023.

AUTOS Y VISTOS:

Para dictar sentencia de acuerdo con las previsiones del art. 431 bis del C.P.P.N. y arts. 9, inc. b), y 17 de la ley 27.307, Dra. Nada Flores Vega, en mi carácter de Jueza de Cámara de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 de San Martín, y en presencia de la señora secretaria "Ad Hoc", Dra. Florencia Leguiza, en la causa **FSM 16900/2013/T01** (reg. int. **4237**), respecto del imputado **VICTOR BERNARDO PREOCUPETZ**, titular del DNI nro. 8.330.911, de nacionalidad argentina, nacido el 8 de julio de 1950 en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, hijo de Moisés y Sara Formaiski, con último domicilio en la Ruta 25, kilómetro 7,5; Country San Diego; Manzana 119, Lote 8, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Intervienen en el presente el Sr. Fiscal General, Dr. Carlos Cearras, el Dr. Leonardo Miño, defensor oficial de Victor Bernardo Preocupetz y los Dres. Mauro Gatti y Santiago Eduardo de Marco en carácter de apoderados de la parte querellante y en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Y CONSIDERANDO:

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: NADA FLORES VEGA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FLORENCIA LEGUIZA, Secretaria ad hoc



#29424068#386477870#20231004094446988

I.- Del requerimiento de elevación a juicio.

Que el día 12 de octubre del año 2016, el fiscal federal de la instancia anterior formuló requerimiento de elevación a juicio en contra del imputado Victor Bernardo Preocupetz, en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 45 del C.P. y art. 1° de la ley 24.769, según modificación de la ley 26.735).

Determinó en tal ocasión, que los hechos aquí imputados son los siguientes:

"[...] Imputo al nombrado, Víctor Bernardo Preocupetz, en su calidad de socio gerente de la firma "Odelpro S.R.L.", CUIT: 30-70851690-9, cuya actividad económica declarada es de Servicios de Créditos, haber presentado ante la A.F.I.P declaraciones juradas engañosas correspondientes al impuesto al valor agregado (IVA) por los períodos fiscales de 2007, 2008 y 2009, y al impuesto a las ganancias con relación a los mismos períodos fiscales, mediante las cuales evadió el pago real de esos tributos, cuyo ajuste practicado determinó un monto ingresado de \$524.289,94; \$1.244.443,64 y \$446.231,05 respecto del IVA y de \$831.005.26; 2.011.643,88 y \$617.793,61 respecto al Impuesto a las Ganancias".

II.- Del acuerdo de juicio abreviado.

Que el día 24 de agosto del año en curso, el Sr. Fiscal General presentó en la bandeja de entradas virtual de este tribunal el acuerdo de juicio abreviado que obra glosado a fojas 714 digital.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS

Posteriormente, con fecha 25 de agosto del mismo año, la defensa oficial del imputado se remitió a lo plasmado por la fiscalía respecto de la solución abreviada del presente proceso.

Por otro lado, obra a fs. 718 digital la conformidad prestada por la Administración Federal de Ingresos Públicos al acuerdo arribado, en su carácter de querellante.

Éste fue efectuado en los términos del Capítulo IV, Título Segundo, del Código Procesal Penal de la Nación y en él se asentó que las partes reconocían la existencia del hecho imputado al justiciable, su participación en él y, en cuanto a la calificación legal, se consideró adecuada que la conducta de Preocupetz debe subsumirse en el delito de evasión simple en relación con el impuesto a las ganancias por el período 2008 (arts. 45 del C.P. y 1° de la ley 24.769).

Sobre el quantum punitivo, se valoró en el acuerdo, en los términos de los arts. 40 y 41 del código de fondo, como atenuante la voluntad del encausado de someterse al instituto del juicio abreviado, colaborando así con una pronta resolución de la causa, además de la naturaleza y modalidad de la acción materia de reproche.



Por lo expuesto, se solicitó para el imputado la pena de dos (2) años de prisión de ejecución condicional, conforme las pautas establecidas en los artículos 26 y 27 del Código Penal y costas, por considerarlo autor del delito de evasión simple.

Asimismo, y como parte del acuerdo, solicitó se le imponga el cumplimiento de la regla del artículo 27 bis inciso 1° del Código Penal por todo el término de la condena.

Por tal motivo, el día 5 de septiembre del corriente año, por medio de la Plataforma "ZOOM" provista por la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura (Acordadas 27/2020, 31/2020 y cc. de la C.S.J.N.), se llevó adelante la audiencia de "visu" prevista por el art. 431 bis del C.P.P.N. con los encartados, en presencia de su defensa, oportunidad en la cual Preocupetz ratificó personal y plenamente el acuerdo, manifestando haber comprendido el contenido de la norma y estar consciente y de acuerdo con lo allí peticionado.

Por todo lo mencionado, a esta altura entiendo que no se ha advertido en el caso ninguna circunstancia que pudiera afectar la libre voluntad del nombrado.

Se llamó luego a autos para dictar sentencia, por lo que el legajo se encuentra en condiciones de ser resuelto. Así, corresponde analizar la viabilidad del acuerdo arribado por las partes, de conformidad con lo normado en el art. 431 bis del ritual, con el objeto de considerar la aplicación del instituto en examen





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS
conforme los principios de legalidad y veracidad que
deben regir en todo tipo de procesos.

Luego de sopesar el alcance de la presentación
efectuada y habiéndose examinado detalladamente los
elementos objetivos que surgen de las presentes
actuaciones, habré de convalidarlo, ya que se cumplen
todos los recaudos legales exigidos por la normativa de
aplicación.

En efecto, comparto la forma en que fueron
descriptos los hechos, con el expreso consenso de la
fiscalía, de la defensa, del justiciable e incluso de la
parte querellante, como también la calificación legal
propiciada, el grado de participación y la
responsabilidad que le cabe en autos, extremos que
emergen palmariamente del universo de elementos
probatorios obrantes en la presente causa.

Bajo esta lupa, corresponde entonces aceptar el
acuerdo propuesto, en tanto se han delimitado
razonablemente sus términos y, por lo tanto, el caso no
requiere un mejor o más profundo conocimiento de los
hechos.

**III.- Materialidad infraccionaria y autoría
responsable.**

Dicho esto, señalo que las pruebas obrantes en el
expediente las valoro conforme las reglas de la sana



crítica racional, exigencia inserta dentro del art. 398 del C.P.P.N.

Este sistema, a diferencia del de la "íntima convicción", determina que el libre convencimiento de los jueces sea resultado racional de los elementos probatorios en que se apoye (cfr. Fallos: 321:1385; 321:3663; 322:3225; 325:1845). Consecuentemente, se demanda que las conclusiones sobre los hechos objeto de la causa respeten las reglas de la lógica, psicología y la experiencia, reclamando además la explicación de sus motivaciones.

Bajo este prisma, quien juzgue debe brindar las razones que lo llevaron a apreciar la prueba del modo en que lo hizo, operación intelectual que reconoce principalmente dos etapas: la descripción del dato probatorio y su valoración crítica (conforme C.F.C.P., Sala I, causa nro. 10499 "Bao, Ricardo Marcelo y otros", resuelta el 05/09/2016).

Entonces, los elementos de prueba reunidos en la presente, valorados acorde a las reglas de la sana crítica racional, me permiten tener por probado que Víctor Bernardo Preocupetz, en su calidad de socio gerente de la firma "ODELPRO S.R.L", presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos declaraciones juradas engañosas respecto al impuesto a las ganancias por el período fiscal 2008, mediante las cuales evadió el pago real de los tributos, por un monto no ingresado de \$ 2.011.643,88 (dos millones once mil





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS
seiscientos cuarenta y tres pesos con ochenta y ocho
centavos).

Este aserto encuentra suficiente apoyo en los elementos de prueba que valoro de conformidad con el art. 431 bis, inc. 5, del C.P.P.N. y que se detallarán a continuación.

En primer lugar, cabe destacar que las presentes actuaciones encuentran su génesis el día 17 de diciembre de 2013, con motivo de la denuncia efectuada por el Dr. Santiago de Marco, en su carácter de jefe interino de la Sección Penal Tributaria dependiente de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, -Dirección General Impositiva-, dando cuenta de que la empresa "ODELPRO S.R.L", con domicilio fiscal en la arteria Merlo nro. 2863, piso 1°, departamento "C", de la localidad y partido de Moreno, habría incurrido en las conductas previstas y reprimidas por los arts. 1 y 2° inciso a) de la ley 24.769.

En la denuncia, se detalló que el imputado, en su carácter de socio gerente, habría evadido el pago del Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales: enero a diciembre de 2.007, por el importe de \$ 524.289,94; enero a diciembre 2.008, por la suma de \$ 1.244.443,64; y, enero a diciembre de 2.009, por el importe de \$ 446.231,05; en tanto en el Impuesto a las



Ganancias, fue denunciado por evasión en el ejercicio fiscal 2.007, por el monto de \$ 831.005,26; ejercicio 2.008, por el monto de \$ 2.011.643,88; y, ejercicio 2.009, por la suma de \$ 617.793,61, superando en cada tributo y ejercicio anual, la condición objetiva de punibilidad, establecida en los artículos 1 y 2 de la ley 24.769.

En dicha ocasión, el Dr. De Marco manifestó que el cargo se originó a raíz de un cruce sistémico efectuado con información del Banco Central de la República Argentina correspondiente a la compra de divisas en moneda extranjera, habiéndose dado inicio a la fiscalización por la Orden de Intervención nro. 607.220, abarcando la verificación tanto I.V.A. y Ganancias, períodos fiscales 2.007, 2.008 y 2.009.

Indicó, también, que el contribuyente "ODELPRO S.R.L" consignó datos inexactos en sus declaraciones juradas, por lo que la fiscalización interviniente procedió a la determinación de deuda en el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias.

A su vez, obra a fs. 28/29 la declaración testimonial del denunciante, quien ratificó los términos denunciados, como también surge a fs. 30/31 y 54/56 la ratificación de las actuaciones en la inspección de la firma "ODELPRO S.R.L" de los inspectores Sergio Esteban Munarriz y Sebastián Cestari, respectivamente, las cuales coinciden con la denuncia formulada a fs. 3/19.

Además, luce a fs. 57/58 la declaración del contador Carlos Marcelo Porcar, quien cumplió funciones



Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS
como jefe de la División Revisión y Recursos de la
Dirección Regional Mercedes de la AFIP, quien indicó que
en el marco de la fiscalización llevada a cabo a la
contribuyente "ODELPRO S.R.L", *"Se le practicaron
ajustes tanto en el Impuesto al Valor Agregado como al
de las ganancias, que tuvieron su fundamento en un
incremento patrimonial injustificado, en virtud de
imputar en cabeza de la sociedad la adquisición de
divisas realizada por empleados y ex empleados de la
firma, que al no existir constancia de su registración
en su documentación contable, como tampoco constancia de
la enajenación de dicha divisa, fue considerado como
ingresos omitidos"*.

Así las cosas, obra a fs. 63/66; 67/69; 71/72;
114/118 y 213/215, las declaraciones testimoniales de
Carolina Elizabeth Arancibia, Matías Daniel Córdoba,
Graciela Noemí Ojeda, Patricia Castellano y Martín
Alejandro Naser, empleados y ex empleados de la firma
"ODELPRO S.R.L.", quienes identificaron principalmente a
Preocupetz como quien se hallaba a cargo de la empresa y
confirmaron que adquirirían dólares para el nombrado,
utilizando sus nombres personales y sus Documentos
Nacionales de Identidad.

Por otro lado, surgen los testimonios de las
personas que adquirieron créditos otorgados por la firma



"ODELPRO S.R.L.", Marcelo Eloy Blanco -fs.144/146-; Julio César Castillo -fs. 148/149, Juan Carlos Guadalupe -fs. 151/157; Francisco Alberto Alaniz -fs. 159/169-; Rafael Cristian Marcelo Cosme -fs. 162/164- y Adriana Alejandra De la Rica -fs. 167/168-.

Así, fueron consultados por la modalidad utilizada para obtener los créditos y si éstos debían tener una finalidad específica, a lo que refirieron, de manera general, que el sindicato municipal de Moreno proveía a los empleados de préstamos personales a través de la financiera "ODELPRO S.R.L." y que los préstamos no debían tener una finalidad específica para serles otorgados.

En otro orden de ideas, obran a fs. 78/90 las constancias remitidas por la Inspección General de Justicia con respecto al estatuto societario de "ODELPRO S.R.L."; entidad que corroboró que Victor Bernardo Preocupetz resultó ser el gerente de la firma y, por otro lado, surge a fs. 110 el informe producido por el Banco Central de la República Argentina que indicó que la empresa "ODELPRO S.R.L" no se encuentra dentro de la nómina de entidades financieras autorizadas en el marco de la ley 21.526.

En ese sentido, de las conclusiones de la experticia encomendada al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obrante a fs. 335/345, se desprende que la firma ODELPRO S.R.L." evadió el Impuesto a las Ganancias durante el ejercicio fiscal del año 2008.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS

En efecto, aquel peritaje determinó que el Incremento Patrimonial no Justificado con respecto al Impuesto a las Ganancias del período fiscal del año 2008 alcanzó un porcentaje del %96,53 y alcanzó el monto de \$ 2.011.643,88.

De dicha diligencia se concluyó, asimismo, que la adquisición de moneda extranjera constituía un incremento patrimonial no justificado y que era incorrecta la aplicación de la alícuota diferencial del 10,5% en el impuesto al Valor Agregado, dado que los préstamos otorgados no tenían relación con trabajos y obra en inmueble y la firma no sería una entidad regida por la ley 21.526.

Llegado este punto, cabe recordar que con fecha 28 de diciembre de 2016, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Nro. 1, Secretaría 3, resolvió *"DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCIÓN respecto de VÍCTOR BERNARDO PROCUPETZ, exclusivamente, en lo que respecta al ejercicio fiscal 2.007 y por el Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, y en consecuencia SOBRESEER al nombrado Procupetz, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en la causa Nro. 16.900/2.013 del registro de la secretaria Nro. 3 de este tribunal, únicamente respecto del período fiscal 2.007, en el*



Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (arts. 59, inc. 3° y 62, inciso 2° y, artículo 67, inciso a) del Código Penal -Según Ley 25.990- y, artículo 336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación)”.

Por otro lado, con fecha 16 de octubre de 2018, este tribunal, con distinta integración, resolvió: *“SOBRESEER parcialmente a VICTOR BERNARDO PREOCUPETZ de las demás condiciones personales obrantes en autos, en relación a los hechos relativos al impuesto al valor agregado - periodos 2008 y 2009- y al impuesto a las ganancias -periodo 2009- por los cuales fuera requerida la presente causa a juicio (conf. arts. 336, inciso 3° y 361 del C.P.P.N), debiendo continuar el trámite respecto de la evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2008”.*

Aquellos pronunciamientos coinciden con lo explayado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos *“Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”.*

Ello, en cuanto el máximo tribunal se pronunció con respecto a los alcances de la ley 27.430, la cual derogó la Ley n° 24.769 y elevó el monto mínimo requerido para la configuración del delito de evasión simple de \$400.000 a \$1.500.000.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reseñó que *“...entre las modificaciones que el legislador introdujo al texto, quedó incluido un retoque en los “montos dinerarios” de algunas de las aumentar los fijados por el del proyecto de ley. Así, respecto de*





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS
*los artículos 1° y 3°, los \$ 400.000 -que consagraba la
ley 24.769 con sus modificatorias- fueron elevados por
el proyecto de ley a \$ 1.000.000 y, al intervenir el
Congreso Nacional, reformuló el monto para que
ascendiera a \$ 1.500.000. De igual modo, respecto del
artículo 2°, inciso a, que -de \$ 4.000.000 en el texto
anterior- el proyecto de ley lo elevó a \$ 10.000.000
pero, a su turno, el Congreso Nacional lo incrementó a \$
15.000.000”.*

En cuanto a la cuestión planteada sobre la procedencia de la ley, el máximo tribunal indicó que “...esta Corte Suprema entiende propicio señalar que son las reglas de hermenéutica jurídica -amplia y reiteradamente consagradas en la jurisprudencia del Tribunal- las que deben guiar al intérprete en general respecto de las leyes y, en especial, de las referidas a materia tributaria, a la luz de su jurisprudencia y el régimen legal aplicable, con especial referencia a la problemática suscitada con reformas legales que elevaron los “montos cuantitativos” en los tipos penales tributarios, según el estado actual de la cuestión. Desde antaño esta Corte ha sostenido, como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal, que sus altas responsabilidades le imponen considerar las respuestas institucionales aprobadas por los otros



Poderes de la Nación en el ámbito de sus atribuciones respectivas, dado que la obligación de dar respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las partes no puede llevar al juez a sustituir con su criterio u opinión la voluntad de los poderes representativos ("Apaza León, Pedro Roberto" -Fallos: 341:500- voto del juez Rosatti)" (cfr. fs. 49/50).

Asimismo, el superior resaltó que "... Por ende, cualquier solución que -por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio constitucional bajo examen, en supuestos como el que motivan esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al "silencio" de la ley 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna" (cfr. fs 57).

Así las cosas, determinó que "la pretensión de hacer valer en supuestos como el de autos la jurisprudencia del Tribunal elaborada sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, en materia de actualización de multas, solo conduce a reafirmar la solución que aquí se adopta" (cfr fs. 61).

Aquellos antecedentes reseñados precedentemente permiten comprender el alejamiento suscitado entre los hechos imputados a Preocupetz en el requerimiento fiscal de elevación a juicio y el que finalmente se juzga en esta instancia.





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS

Es que en el transcurso de estos actuados, y en atención a la plena vigencia de la ley 27.430, aplicada como ley penal más benigna, el único monto imputable a Preocupetz es aquel que excedió el monto punible de \$1.500.000, ello con respecto al Impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo fiscal del año 2008, cuyo monto asciende a \$ 2.011.643,88.

En síntesis, este conjunto de elementos incriminantes, analizados en su global armonía, de acuerdo con la directriz establecida en el art. 398 del C.P.P.N. lleva a alcanzar la certeza que esta instancia procesal impone acerca de que el imputado Víctor Bernardo Preocupetz resulta penalmente responsable de los hechos atribuidos, deviniendo inexcusable su reproche penal. En efecto ha quedado debidamente acreditado que a raíz de los testimonios, informes contables y peritajes, acompañado por el resto del material probatorio ya valorado, se dilucidó la participación del imputado en los hechos en pugna.

Sin eximentes, que no fueron invocados por las partes, ni tampoco advertidos por mí. Rige la prueba de los artículos 241, 263 y 398 del código adjetivo.

IV.- Calificación legal.

Sobre este punto, concuerdo con las partes en que las conductas descriptas y probadas en el punto anterior



deben ser subsumidas de la manera en que fue propuesta en el acuerdo de juicio abreviado.

De esa forma, tal como fuera reseñado en el acuerdo de juicio abreviado suscrito por las partes, Víctor Bernardo Preocupetz debe responder como autor penalmente responsable del delito de evasión simple con relación al impuesto a las ganancias por el período 2008 (arts. 45 del C.P. y 1° de la ley 24.769).

En ese sentido, surge de las probanzas de la causa que el accionar del imputado significó una defraudación al fisco nacional, ello por montos que superaron la condición objetiva de punibilidad prevista por ley, por lo que se han probado acabadamente, tanto los extremos objetivos, como subjetivos del tipo penal en trato.

Por ello, y en virtud de las probanzas arrimadas al legajo y el reconocimiento efectuado por el imputado en la audiencia de visu obrante a fs. 718, con respecto a los hechos enrostrados, habré de decidirme a favor de la calificación legal propiciada por las partes.

V.- Individualización de la pena.

Con relación a la pena a imponer y teniendo en cuenta que rige en el caso el artículo 431 bis, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación, el límite máximo para el tribunal, es el acordado por las partes. De modo que sólo resta analizar si la pena pactada resulta justa para el caso o bien debe reducirse.

A fin de establecer el monto de pena a imponer debe efectuarse *“...una comparación entre dos valores: el*





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS

disvalor social del hecho y el disvalor social de la pena para el individuo" (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, tomo II, paginas 419/420, con cita de Mezger), teniendo en cuenta para ello los parámetros establecidos en los arts. 40 y 41 del C.P.

Se ha dicho que *"...la individualización de la pena debe partir del hecho y se impone que la pena se adecue a la personalidad del autor, en la medida en que continúe reflejando la gravedad del ilícito concreto en virtud de la vigencia de los principios del hecho y de proporcionalidad"* (Patricia S. Ziffer en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", dirección: David Baigun y Eugenio Raúl Zaffaroni -comentario a los arts. 40 y 41- Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2002, página 62).

Bajo estas claras premisas, considero -de consuno con lo expresado por el Sr. Fiscal General en su escrito-, que resultan atenuantes, la admisión del hecho por parte del imputado, la voluntad del acusado de someterse al instituto del juicio abreviado y la modalidad y naturaleza del hecho materia de reproche.

Pondero, asimismo, la correcta impresión que me causó el imputado en la audiencia de visu desarrollada el pasado 5 de septiembre del corriente.



Por otra parte, encuentro como agravante el elevado monto no ingresado imputado al nombrado por el período fiscal del año 2008, el cual asciende a la suma de \$ 2.011.643,88.

A partir de todos estos datos objetivos, de acuerdo con las pautas mensurativas enunciadas por los arts. 40 y 41 del código de fondo, además de coincidir con la descripción del hecho y la calificación legal propuesta por las partes, entiendo justo no apartarme de la sanción penal propuesta por el Sr. Fiscal General.

Es por ello que habré de imponer a Víctor Bernardo Preocupetz la pena de dos (2) años de prisión y costas, cuyo cumplimiento habrá de dejarse en suspenso, con la imposición de las reglas de conducta establecidas en el art. 27 bis inciso 1° del C.P por el término de la condena.

En cuanto a la procedencia, en el presente supuesto, de una condena de ejecución condicional, habré de resaltar que, teniendo en cuenta el corto plazo de la pena impuesta el ingreso a prisión solo significaría un plus retributivo que acarrearía exclusivamente efectos contrarios a la reinserción social, finalidad propia de la ejecución de las penas privativas de la libertad según el art. 1° de la ley 24.660.

Ahora bien, en cuanto a lo previsto por el art. 27 bis, entiendo que tal como fue sostenido por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal *“las reglas de conducta enumeradas en el art. 27 bis del Código Penal son de exclusivo resorte del Tribunal de grado y*





Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS
*constituyen una obligación inherente a la condena
condicional, motivo por el cual su imposición no puede
ser objeto de acuerdo entre las partes* ("Maturano,
Nicolás Roberto s/ recurso de casación", FSM
76479/2017/TO1/CFC1, rta. 26/10/2022).

Bajo este prisma, considero que debe imponerse,
por el plazo de dos años, la regla establecida en el
inciso 1º de la mencionada norma, a saber, fijar
residencia y someterse al cuidado de un patronato
(actualmente el Patronato de Liberados Bonaerense).

VI.- Otras cuestiones

Por otro lado, el imputado deberá abonar las
costas del proceso (arts. 530 y 531 del CPPN), de las
cuales \$ 1.500 corresponden a la tasa de justicia, monto
que debe hacerse efectivo dentro de los 5 días de quedar
firme la presente, según lo previsto por el art. 11 de
la ley 23.898.

Asimismo, deberá comunicarse lo aquí resuelto a
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
y, a su vez, remitir a ese organismo la documentación
aportada, a los fines que estime corresponder. A saber:
un cuerpo de impuesto a las ganancias en 217 fs.; un
cuerpo de compra de divisas Actuación nro. 11968-1541-
2010 en 42 fs.; un cuerpo de antecedentes de
investigación Alcance nro. 11933-932-2012/3 en 84 fs.;



un cuerpo de informe de investigación Alcance nro. 11933-932-2012/4 en 10 fs.; cuatro cuerpos de anexo de circulaciones en un total de 615 fs.; Alcance nro. 11933-932-2012 y cinco cuerpos de IVA en 1031 fs. Actuación nro. 11933-932-2012.

Por todo ello, de conformidad con las citas legales hechas y consideraciones vertidas, oídas que fueron las partes en los términos de lo establecido en el artículo 431 bis del C.P.P.N.,

RESUELVO:

I. CONDENAR a VICTOR BERNARDO PREOCUPETZ de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de **DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL Y COSTAS**, por considerarlo autor del delito de evasión simple (arts. 45 del C.P. y 1° de la ley 24.769).

II. IMPONER a VICTOR BERNARDO PREOCUPETZ por el término de **DOS (2) AÑOS**, la regla de conducta establecida en el inc. 1° del art. 27 bis del C.P., esto es, fijar residencia y someterse al cuidado del patronato de liberados.

III. HACER SABER a la Administración Federal de Ingresos Públicos lo aquí resuelto y **REMITIR** la documentación aportada por dicho organismo.

Regístrese, notifíquese y publíquese (Ac. 15/13 C.S.J.N.). Firme que sea, comuníquese a quien corresponda y practíquese por Secretaría el pertinente cómputo de vencimiento de pena. Oportunamente, **ARCHÍVESE.**



Poder Judicial de la Nación

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín nro. 5

FSM 16900/2013/TO1

PRINCIPAL EN TRIBUNAL ORAL TO01 - IMPUTADO: PROCUPETZ, VICTOR BERNARDO
s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS

Ante mí:

En la misma fecha se cumplió. Conste.-

